

## Anexo C - Palabras clave (Keywords)

CONCEPTO	DEFINICIÓN	FUENTE
Autos de seguimiento	Los autos de seguimiento de sentencias son decisiones judiciales que emite un tribunal, especialmente la Corte Constitucional de Colombia, para monitorear y asegurar el cumplimiento de las órdenes dictadas en sentencias complejas o que declaran un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Estos autos, también llamados providencias interlocutorias, evalúan avances, rezagos y retrocesos en la implementación de medidas, permitiendo a la Corte utilizar medios coercitivos para garantizar la protección de derechos fundamentales y superar fallas estructurales.	
El estado de cosas inconstitucional (ECI)	Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población internamente desplazada. En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por el mismo legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples derechos. En segundo lugar, otro elemento que confirma la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado es el elevado volumen de acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener las distintas ayudas y el incremento de las mismas. En tercer lugar, los procesos acumulados en la presente acción de tutela, confirma ese estado de cosas inconstitucional y señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos. En cuarto lugar, la continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única entidad. En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en factores estructurales enunciados en el apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema frente a la capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente a él. En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas.	Sentencia T-025-2004
Estabilización socioeconómica	es la condición en la cual las víctimas superan la situación de emergencia y dependencia de la asistencia, accediendo a ingresos sostenibles, vivienda adecuada y servicios básicos, en un marco de garantías que les permite reconstruir su proyecto de vida	Uprimny, R. y Saffon, M. (2011). Justicia transicional y derechos de las víctimas. Bogotá: Dejusticia.
Gestión del cambio:	Proceso estructurado que busca guiar a las personas y a las organizaciones en la adaptación a nuevas condiciones, reduciendo la resistencia y asegurando que las transformaciones produzcan los resultados esperados	Kotter, J. P. (1996). <i>Leading Change</i> . Boston: Harvard Business School Press.
Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED):	Instrumentos de medición diseñados por la Corte Constitucional de Colombia (Auto 008 de 2009, seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004), con el fin de evaluar las condiciones reales de vida de la población víctima del desplazamiento forzado. Estos indicadores permiten verificar si las personas en situación de desplazamiento acceden efectivamente a derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, alimentación, generación de ingresos, reunificación familiar, entre otros.	Corte Constitucional de Colombia, Auto 008 de 2009, seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
Pirámide de Maslow o Escala de Maslow:	Modelo psicológico propuesto por Abraham Maslow en 1943, que organiza las necesidades humanas en niveles jerárquicos. Inicia con las necesidades básicas (alimentación, descanso, seguridad) y avanza hacia las más altas, como reconocimiento y autorrealización.	<a href="https://doi.org/10.1037/h0054346">Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. <i>Psychological Review</i>, 50(4), 370–396.</a> <a href="https://doi.org/10.1037/h0054346">https://doi.org/10.1037/h0054346</a>
Plan de Acción Distrital Pruriano 2024-2027	De acuerdo con lo establecido en el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 2460 de 2015, todas las entidades territoriales deben diseñar un Plan de Acción Territorial (PAT) como instrumento de planeación que contempla los componentes de atención, asistencia, reparación integral, prevención y protección para las víctimas del conflicto armado. En consecuencia, la ciudad de Bogotá cuenta con el Plan de Acción Distrital (en adelante PAD), como herramienta de política pública que recoge la oferta de las entidades del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado residentes en Bogotá (SDARIV) y establece los lineamientos para su implementación y seguimiento.	<a href="https://observatorio.victimas.bogota.gov.co/documento/plan-de-accion-distrital-pruriano-2024-2027">Observatorio Distrital de Víctimas</a> <a href="https://observatorio.victimas.bogota.gov.co/documento/plan-de-accion-distrital-pruriano-2024-2027">https://observatorio.victimas.bogota.gov.co/documento/plan-de-accion-distrital-pruriano-2024-2027</a>
Plan de Acción Territorial	Es el instrumento de planeación que deben formular las entidades territoriales para garantizar la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Se construye a partir de los programas, metas y recursos definidos en el Plan de Desarrollo Territorial, en armonía con los demás instrumentos de planeación y presupuesto. El PAT debe incluir programas y proyectos de la entidad territorial orientados a garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima, así como metas y recursos anuales que se proyectan de manera indicativa para los cuatro (4) años siguientes a su adopción, conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo respectivo.	Decreto 2460 de 2015, art. 2.2.8.3.1.5.
Plan de Desarrollo Territorial	Instrumento de planeación de las entidades territoriales, compuesto por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo. Su formulación y ejecución se rige por los criterios establecidos en la Ley 152 de 1994, y en el caso de territorios indígenas, debe elaborarse de acuerdo con sus usos y costumbres, asegurando articulación con la planeación presupuestal, nacional y territorial	Ley 152 de 1994, art. 31
Política Pública	La política pública puede entenderse como el conjunto de orientaciones, decisiones y acciones del Estado que buscan intervenir en la realidad social para transformarla o mantenerla, en función de determinados intereses y valores colectivos."	García Villegas, M. (2004). Estado, política y derecho. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Población Vulnerable	Grupo de personas que enfrentan un riesgo elevado de padecer problemas de salud —físicos, mentales o sociales—, y de experimentar desigualdades significativas en su acceso a servicios, oportunidades y protección social, debido a condiciones económicas, demográficas, culturales o institucionales desfavorables. La vulnerabilidad puede originarse tanto en factores inherentes (edad, género, discapacidad, origen étnico) como en factores adquiridos (privación económica, discriminación, falta de redes de apoyo, barreras al acceso a servicios).	Capítulo "Vulnerable Populations" de <i>Nursing: Mental Health and Community Concepts</i> (Open RN). "A vulnerable population is a group of individuals who are at increased risk for health problems and health disparities."

Reparación integral individual	<p>La Reparación Integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales. Propende por reconocer el daño causado, contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida, devolver a la víctima su estatus y la garantía de sus derechos, dependiendo del sufrimiento particular, de la visión del entorno y del sentido de justicia que cada una de ellas pueda tener, pero mejorando su nivel de Goce Efectivo de Derechos -GED-. La reparación integral comprende 5 medidas, cada una de estas medidas es implementada por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV. Sin embargo, no todas las víctimas acceden a todas las medidas de reparación, el acceso depende del tipo de hecho, del daño sufrido y de la voluntad de las víctimas para acceder a las mismas.</p>	<a href="https://www.unidadvictimas.gov.co/repuracion-integral-individual/">https://www.unidadvictimas.gov.co/repuracion-integral-individual/</a>
Soluciones Duraderas	<p>El concepto de soluciones duraderas surge en el Comité Permanente entre Organismos (IASC) y en el Marco de Soluciones Duraderas para las Personas Desplazadas Internamente (IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons, 2010), liderado por ACNUR y el Representante del secretario general de la ONU para los Desplazados Internos, Walter Kälin. Allí se definió que las soluciones duraderas son: El retorno voluntario al lugar de origen. La reintegración local en la comunidad de acogida. El reasentamiento en otra parte del país, siempre en condiciones de seguridad, dignidad y sostenibilidad.</p>	<a href="https://www.unidadvictimas.gov.co/reforma-LeyVictimas-1448/Soluciones_duraderas.html">https://www.unidadvictimas.gov.co/reforma-LeyVictimas-1448/Soluciones_duraderas.html</a>
Víctimas del Conflicto Armado	<p>Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño a sus derechos por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, incluyendo aquellas que se encuentran en el exterior, independientemente de su estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos o en los eventos de delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.</p>	<p>Artículo 3 Ley 1448 de 2011 as acciones y metas</p>
Vulnerabilidad estructural	<p>Condición de desventaja persistente que enfrentan las víctimas del conflicto armado en el acceso a derechos fundamentales, pese a las medidas de atención humanitaria.</p>	<p>Corte Constitucional, Auto 244 de 2025</p>

CONCEPTO	DEFINICIÓN	FUENTE
Tracking cars	Judicial follow-up orders are court decisions issued by a court, particularly the Constitutional Court of Colombia, to monitor and ensure compliance with orders issued in complex judgments or those declaring a State of Unconstitutionality (ECI). These orders, also known as interlocutory rulings, evaluate progress, delays, and setbacks in the implementation of measures, allowing the Court to use coercive means to guarantee the protection of fundamental rights and overcome structural failures.	
The unconstitutional state of affairs (ECI)	Judicial follow-up orders are court decisions issued by a court, particularly the Constitutional Court of Colombia, to monitor and ensure compliance with orders issued in complex judgments or those declaring a State of Unconstitutionality (ECI). These orders, also known as interlocutory rulings, assess progress, delays, and setbacks in the implementation of measures. Several elements confirm the existence of an unconstitutional state of affairs with regard to the situation of the internally displaced population. First, the seriousness of the situation of rights violations faced by the displaced population was expressly recognized by the legislature itself when defining the status of displaced persons and highlighting the massive violation of multiple rights. Second, another element that confirms the existence of an unconstitutional state of affairs with regard to forced displacement is the high volume of tutela actions filed by displaced persons to obtain various forms of assistance and increases in such assistance. Thirdly, the proceedings accumulated in the present action for protection confirm this unconstitutional state of affairs and indicate that the violation of rights affects a large part of the displaced population in many parts of the country and that the authorities have failed to take the necessary corrective measures. Fourth, the continued violation of these rights cannot be attributed to a single entity. Fifth, the violation of the rights of displaced persons is based on structural factors set out in section 6 of this ruling, among which the lack of correspondence between what the rules say and the means to comply with them stands out. An aspect that takes on special significance when one considers the insufficiency of resources given the evolution of the displacement problem and the magnitude of the problem in relation to the institutional capacity to respond to it in a timely and effective manner. In conclusion, the Court will formally declare the existence of an unconstitutional state of affairs regarding the living conditions of the internally displaced population. Therefore, both national and territorial authorities, within the scope of their powers, must adopt corrective measures to overcome this state of affairs.	Judgment T 025- 2004
Socioeconomic stabilization	is the condition in which victims overcome the emergency situation and dependence on assistance, gaining access to sustainable income, adequate housing, and basic services, within a framework of guarantees that allows them to rebuild their life project.	Uprimny, R. and Saffon, M. (2011). <i>Transitional Justice and Victims' Rights</i> . Bogotá: Dejusticia.
Change management:	A structured process that seeks to guide individuals and organizations in adapting to new conditions, reducing resistance, and ensuring that transformations produce the expected results.	Kotter, J. P. (1996). <i>Leading Change</i> . Boston: Harvard Business School Press.
Indicators of Effective Enjoyment of Rights (IGED):	Measuring instruments designed by the Constitutional Court of Colombia (Order 008 of 2009, follow-up to Ruling T-025 of 2004), with the aim of assessing the actual living conditions of the population affected by forced displacement. These indicators make it possible to verify whether displaced persons effectively have access to fundamental rights such as health, education, housing, food, income generation, and family reunification, among others.	Constitutional Court of Colombia, Order 008 of 2009, follow-up to Judgment T-025 of 2004.
Maslow's Pyramid or Maslow's Scale:	Ein psychologisches Modell, das 1943 von Abraham Maslow vorgeschlagen wurde und die menschlichen Bedürfnisse in hierarchische Ebenen einteilt. Es beginnt mit Grundbedürfnissen (Nahrung, Ruhe, Sicherheit) und geht weiter zu höheren Bedürfnissen wie Anerkennung und Selbstverwirklichung.	<a href="https://doi.org/10.1037/h0054346">Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. <i>Psychological Review</i>, 50(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346</a>
2024-2027 Multi-Year District Action Plan	In accordance with the provisions of Article 174 of Law 1448 of 2011 and Decree 2460 of 2015, all territorial entities must design a Territorial Action Plan (PAT) as a planning instrument that includes components of care, assistance, comprehensive reparation, prevention, and protection for victims of armed conflict. Consequently, the city of Bogotá has the District Action Plan (hereinafter PAD) as a public policy tool that brings together the services offered by the entities of the District System for Assistance, Care, and Comprehensive Reparation for Victims of Armed Conflict residing in Bogotá (SDARIV) and establishes guidelines for its implementation and monitoring.	<a href="https://observatorio.victimas.bogota.gov.co/documento/plan-de-accion-distrital-prurianual-2024-2027">Observatorio Distrital de Víctimas https://observatorio.victimas.bogota.gov.co/documento/plan-de-accion-distrital-prurianual-2024-2027</a>
Territorial Action Plan	It is the planning instrument that territorial entities must formulate to guarantee prevention, protection, care, assistance, and comprehensive reparation for victims of armed conflict. It is based on the programs, goals, and resources defined in the Territorial Development Plan, in harmony with other planning and budgetary instruments. The PAT must include programs and projects of the territorial entity aimed at guaranteeing the effective enjoyment of rights by the victim population, as well as annual goals and resources that are projected indicatively for the four (4) years following its adoption, in accordance with the provisions of the respective Development Plan.	Decree 2460 of 2015, Art. 2.2.8.3.1.5.
Territorial Development Plan	Planning instrument for territorial entities, consisting of a strategic component and a medium- and short-term investment plan. Its formulation and execution are governed by the criteria established in Law 152 of 1994, and in the case of indigenous territories, it must be prepared in accordance with their customs and traditions, ensuring coordination with national and territorial budget planning.	Law 152 of 1994, Article 31
Public Policy	Public policy can be understood as the set of guidelines, decisions, and actions taken by the state that seek to intervene in social reality in order to transform or maintain it, based on certain collective interests and values.	García Villegas, M. (2004). <i>State, politics, and law</i> . Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Vulnerable Population	A group of people who face a high risk of suffering from health problems—physical, mental, or social—and of experiencing significant inequalities in their access to services, opportunities, and social protection due to unfavorable economic, demographic, cultural, or institutional conditions. Vulnerability can stem from both inherent factors (age, gender, disability, ethnicity) and acquired factors (economic deprivation, discrimination, lack of support networks, barriers to accessing services).	Capítulo "Vulnerable Populations" de <i>Nursing: Mental Health and Community Concepts</i> (Open RN). "A vulnerable population is a group of individuals who are at increased risk for health problems and health disparities."
Comprehensive individual repair	Comprehensive Reparation is a duty of the State and a right of victims affected by violations of international humanitarian law and/or serious and manifest violations of human rights that occurred during the internal armed conflict, who have suffered severe damage to their lives, integrity, property, and personal, family, and professional life plans. It aims to recognize the damage caused, contribute to the reconstruction of the life project, restore the victim's status and guarantee their rights, depending on the particular suffering, the vision of the environment, and the sense of justice that each of them may have, but improving their level of Effective Enjoyment of Rights (GED). Comprehensive reparation comprises five measures, each of which is implemented by the entities that make up the National System for Comprehensive Care and Reparation for Victims (SNARIV). However, not all victims have access to all reparation measures; access depends on the type of incident, the damage suffered, and the victims' willingness to access them.	<a href="https://www.unidadvictimas.gov.co/repuracion-integral-individual/">https://www.unidadvictimas.gov.co/repuracion-integral-individual/</a>
Long-lasting Solutions	The concept of durable solutions emerged in the Inter-Agency Standing Committee (IASC) and in the IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons (2010), led by UNHCR and the UN Secretary-General's Representative for Internally Displaced Persons, Walter Kälin. It defined durable solutions as: Voluntary return to the place of origin. Local reintegration into the host community. Resettlement in another part of the country, always in conditions of safety, dignity, and sustainability.	<a href="https://www.unidadvictimas.gov.co/reforma-LeyVictimas-1448/Soluciones_duraderas.html">https://www.unidadvictimas.gov.co/reforma-LeyVictimas-1448/Soluciones_duraderas.html</a>
Victims of Armed Conflict	For the purposes of this law, victims are considered to be those persons who, individually or collectively, have suffered damage to their rights as a result of events occurring since January 1, 1985, including those who are abroad, regardless of their immigration status in the country where they live, whether or not they enjoy international protection, refuge, or asylum, as a result of violations of international humanitarian law or international human rights standards, or in the case of crimes against natural resources and the environment that occurred during the internal armed conflict.	Artículo 3 Ley 1448 de 2011 as acciones y metas
Structural vulnerability	Persistent disadvantage faced by victims of armed conflict in accessing fundamental rights, despite humanitarian assistance measures.	Corte Constitucional, Auto 244 de 2025